



Análisis de coyuntura

Los dilemas de la (in)gobernabilidad

IPNUSAC

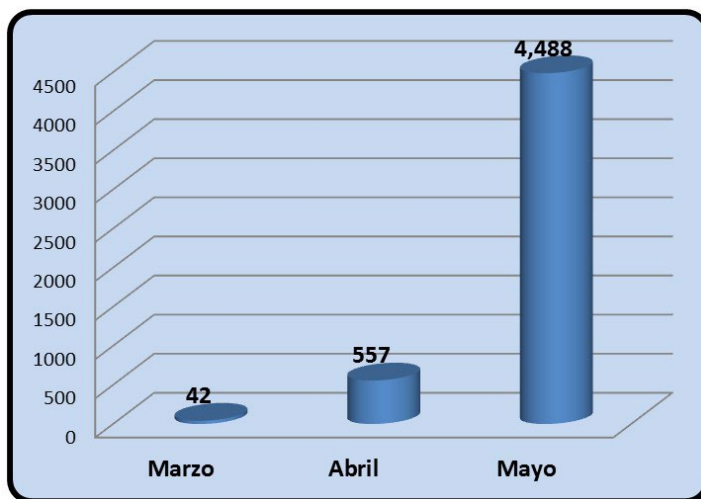
Transcurridas 11 semanas desde que se conoció en Guatemala del primer caso de contagio con la COVID-19, la evolución de la epidemia en territorio nacional siguió siendo la variable principal para la lectura de los macro procesos sociales, económicos y políticos que impregnan el acontecer en el país. Durante la quincena a la cual corresponden estas líneas de análisis (15 a 31 de mayo), al agravado desafío sanitario y a la crisis socioeconómica desencadenada por las medidas de contención y mitigación, se suman numerosas señales que apuntan hacia la formación de nubarrones grises para la (in) gobernabilidad.

Subiendo la montaña

Mayo terminó, por mucho, como el peor mes en términos de la diseminación de la COVID-19 en el país. Comparado con marzo y abril, el recién concluido quinto mes del año se muestra como un período de aceleración del

contagio que, no por previsible deja de ser preocupante. Según puede apreciarse en la siguiente gráfica, mientras en los dos meses previos se logró la contención exitosa de la epidemia, en mayo inició la verdadera ascensión de la montaña sin que haya indicios de estar cerca de su pico más alto.

Gráfica 1
Evolución del contagio de COVID-19
(casos nuevos por mes)



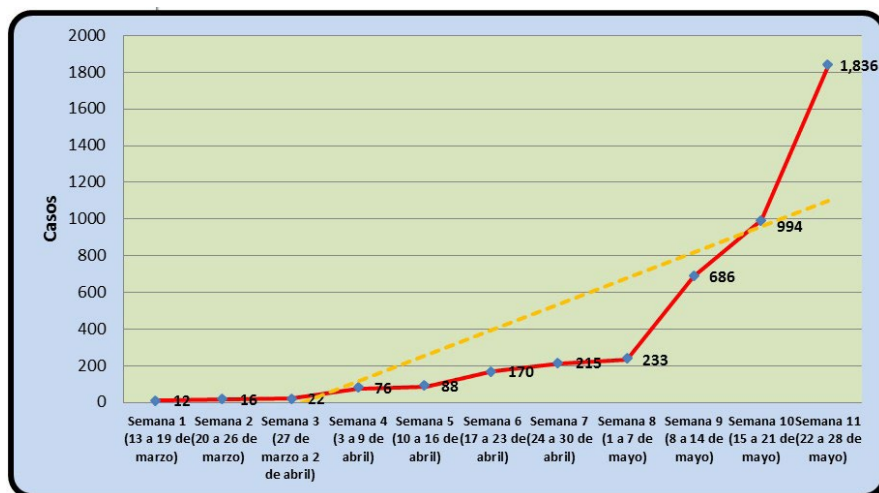
Fuente: elaboración propia con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

Hasta el 31 de mayo, el total de personas infectadas en Guatemala llegó a 5 mil 87 casos, de los cuales el 88 por ciento se detectó en el último mes. Y, de ellos, 3,444 casos (o 77 por ciento de los contagios) ocurrieron durante la segunda quincena del mes. En efecto, como muestra la gráfica

2, las últimas tres semanas epidemiológicas fueron las de mayor aceleración del contagio. También en este período creció el número de personas fallecidas a causa del COVID-19, pasando de 18 decesos hasta el 30 de abril a 108 hasta el 31 de mayo último, para un incremento de 500 por ciento.

Gráfica 2

Evolución semanal del contagio desde el primer caso



Fuente: elaboración propia, con datos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social

La evolución ascendente de la epidemia ocurre en medio de un proceso evidente de colapso del sistema de salud pública, deterioro que se manifiesta en: a) saturación de los hospitales de campaña creados para atender a los infectados, retraso de entrada en funcionamiento de otros planificados e improvisación de áreas específicas en nosocomios que inicialmente no se había considerado para tal fin; b) falta de personal suficiente para atender a un número de

pacientes que crece cada día, en medio de la inconformidad de los trabajadores de salud por la falta de insumos y medicamentos, así como por la falta de certeza en sus contrataciones y por el impago de sus salarios; c) pérdida de la capacidad de seguimiento epidemiológico, dado el desborde de contagios como efecto de erráticas disposiciones gubernamentales en relación con las restricciones a la movilidad social (especialmente lo ocurrido con el "cierre total" del país del 15 al 17 de mayo,

y en los siguientes dos fines de semana, que alentaron aglomeraciones que, paradójicamente, se pretendía evitar).¹

Lo ocurrido durante esta quincena corrobora la extendida impresión de que el presidente Alejandro Giammattei, en la mejor de las presunciones animado por “buenas intenciones”, asumió una conducción de la crisis plagada de improvisaciones y voluntarismo, sin tener verdaderamente en cuenta las falencias del sistema de salud. Apoyándose, además, en unas autoridades del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) con débil liderazgo y proclives a acatar a pie juntillas las instrucciones presidenciales (“nuestro presidente siempre va un paso adelante”, tal una de las expresiones predilectas de Hugo Monroy, titular del MSPAS cuya renuncia o destitución se empieza a pedir por distintas voces y cuya interpelación parlamentaria fue pedida por bancadas de oposición en el Congreso de la República).

En ese oleaje encrespado que agita al MSPAS y el frente principal de la gestión del gobierno de

Giammattei, se creó la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), a cuya cabeza designó al epidemiólogo Edwin Asturias y a quien acompañan los también médicos Eduardo Arathoon y Hugo Pezzarossi.

En un país estragado por la desconfianza, la noticia fue recibida con beneplácito –bajo la premisa de que la Coprecovid permitirá que sean los criterios científicos los predominantes para conducir al país en la fase de mitigación en que se encuentra la epidemia. Sin embargo, el escepticismo siempre presente en el país levanta interrogantes sobre la capacidad real de una comisión técnica-científica de alto nivel para lidiar con los problemas estructurales y circunstanciales que aquejan al sistema de salud. Como escribió el periodista Gustavo Berganza, el Dr. Asturias (y la comisión)

tendrá que enfrentarse a la realidad de un Ministerio de Salud Pública con enormes deficiencias y carencias en su funcionamiento, tanto en la parte sustantiva –hospitales,

1. Sobre el efecto de esas disposiciones erráticas, véase en esta misma edición el artículo “Las tasas de crecimiento de la población infectada por coronavirus en Guatemala en los primeros 78 días de la epidemia nacional”, escrito por Mamerto Reyes Hernández y Lesbia Calderón Aguirre, en pág. __ y siguientes.

centros de salud y su personal— como en la administrativa. Es una cartera de la cual fueron destituidos dos viceministros, y que carga con una denuncia ante el Ministerio Público sobre la existencia de una red criminal en su interior.²

La (in)gobernabilidad a la vista

Inmerso el país —ahora sí— en la fase más complicada de la epidemia, con una curva ascendente de los contagios y con múltiples indicios de agotamiento social y económico a causa de las medidas de contención y mitigación de la enfermedad, el signo más relevante del acontecer nacional durante la quincena bajo análisis fue precisamente el de la multiplicación de las señales que hacen volver la mirada hacia los riesgos para la gobernabilidad democrática del país.

Teniendo como trasfondo una sorda confrontación entre los partidarios del mantenimiento (o aun el endurecimiento) de las medidas de confinamiento y paralización de la actividad económica, y aquellos

que se pronuncian a favor de “devolver la libertad” restringida por el estado de calamidad pública, el país se bambolea entre un cierre parcial y la presión de la realidad socioeconómica que empuja a millones de personas a “buscar la vida”, porque a estas alturas de la emergencia las instituciones del Estado, especialmente del gobierno central, siguen dando muestras de incapacidad para ejecutar los programas de asistencia económica acordados por el Congreso de la República a finales de marzo pasado. La cuestión se plantea en términos muy claros: no se le puede pedir a las personas permanecer encerradas en sus casas si el Estado ha sido incapaz de proveer la asistencia prometida para resistir la merma de los ingresos.

Si a eso se agregan las disposiciones erráticas del gobierno (mencionadas en párrafos superiores) y las graves fallas de comunicación en que personalmente ha incurrido el presidente Giammattei, resulta fácil comprender el deterioro en el clima de la convivencia social y el aumento de tensiones que, durante el período bajo análisis,

2. Berganza, Gustavo (2020) “El doctor Asturias en la boca del tigre”, 20 de mayo de 2020, en Blog de Gustavo Berganza, accesible en <https://www.facebook.com/1Gustavo.Berganza/>

han llegado a niveles verdaderamente candentes. Tal es el caso, por ejemplo, de la confrontación entre pobladores de San Francisco el Alto (Totonicapán) y contingentes de la Policía Nacional Civil (PNC), ocurrida el 16 de septiembre cuando los primeros hicieron un bloqueo carretero para impedir la circulación de vehículos que transportaban productos de grandes empresas. Por las mismas razones hubo protestas comunitarias en el cruce vial conocido como Los Encuentros, en el departamento de Sololá, en la misma fecha. Esas y otras expresiones de descontento en pueblos indígenas –que el gobierno trató de apaciguar rectificando o aclarando la información sobre limitaciones al transporte de alimentos perecederos– denotan tensiones sociales bastante profundas enlazadas con reivindicaciones de carácter étnico, ahora fuertemente impregnadas de connotaciones clasistas relativamente novedosas.

Aunque el gobierno se ha cuidado de no referirse a esos simbólicos incidentes, no ha faltado quien

llame a sospecha por el establecimiento del estado de sitio y la ocupación policial-militar de tres municipios del departamento de Sololá: Santa Catarina Ixtahuacán, Nahualá y Santa Lucía Utatlán, decretada el sábado 30 de mayo. Si bien el conflicto entre habitantes de los dos primeros municipios se remonta a muchas décadas atrás, en el ambiente de tensiones sociales descrito no deja ser llamativo que se haya “activado” precisamente después de los conatos de “desobediencia” ocurridos en una región donde las autoridades ancestrales se han mostrado muy activas e influyentes en la convocatoria de movilizaciones sociales. De la beligerancia de esos liderazgos ancestrales da cuenta un comunicado de la Alcaldía Indígena de Santa Lucía Utatlán, del mismo 30 de mayo, en el que “lamenta las decisiones unilaterales” tomadas por Giammattei, con las cuales, dice, “viola flagrantemente nuestros derechos reconocidos tanto en la normativa interna como en la normativa internacional”.³

3. Municipalidad Indígena, Santa Lucía Utatlán, Sololá. Comunicado No. 2. De fecha 30 de mayo de 2020.

Si bien los acontecimientos en esa región del occidente del país son los más sobresalientes, por el contexto descrito, no son los únicos. Incidentes con características diversas –pero que denotan la existencia de una pradera seca susceptible de incendiarse– ocurrieron durante la quincena en Malacatán, San Marcos, y en San Ildefonso Ixtahuacán, Huehuetenango. El denominador común en ambos municipios es la resistencia de los pobladores a acatar las disposiciones de orden sanitario, las cuales –cabe reiterarlo– aluden a un estrés social propenso a diversas formas de desborde de la gobernabilidad.

A su modo, con un contenido de clase distinto y con un alto grado de anclaje ideológico conservador, esa propensión desestabilizadora se puso de manifiesto también en una peculiar “manifestación” motorizada realizada el jueves 28 de mayo en la ciudad de Guatemala. A ella acudieron, principalmente, personas de ostensible condición económica desahogada

y connotados activistas de corrientes “libertarias”, varios de los cuales también promovieron la denuncia de un “fraude electoral”, luego de los comicios generales de 2019.⁴

Si bien la referida protesta tuvo un ostensible sesgo antigubernamental y cabe agregarla a los signos de una frágil gobernabilidad, resultaría precipitado deducir de ahí que hay un sisma irreparable en las filas conservadoras –en las cuales tienen un lugar propio el partido oficial Vamos y el mismo Giammattei. Más bien, cabe sospechar una suerte de “compadre hablado” que resulte funcional a la poco disimulada orientación pro empresarial del gobierno, que en la coyuntura de la epidemia tiende a favorecer la continuidad –de hecho– de ciertas actividades económicas. Tal es el caso, por ejemplo, de la permisividad hacia el funcionamiento de empresas maquiladoras, algunas de las cuales se convirtieron en focos de contagio.

4. Sobre los alegatos de fraude electoral realizados desde la extrema derecha del espectro político nacional véase “Complicado cambio de página”, Revista Análisis de la Realidad Nacional edición #165, julio de 2019. Accesible en <http://ipn.usac.edu.gt/wp-content/uploads/2019/07/IPN-RD-165-1.pdf>

En resumen, durante la segunda quincena de mayo se hicieron evidentes los síntomas de una complicada (in)gobernabilidad, frente a los cuales se producen respuestas típicamente represivas – como el estado de sitio en Sololá –, pero también aparecen positivos pasos hacia el establecimiento de canales de comunicación entre el gobierno y la sociedad.

La reunión que el presidente Giammattei sostuvo el 22 de mayo con personalidades repre-

sentativas de la diversidad social del país, así como la convocatoria que el vicepresidente Guillermo Castillo ha realizado a mesas de trabajo con participación de las “mentes brillantes” de la nación, son signos alentadores de que el país puede encontrar rutas hacia la preservación de la gobernabilidad democrática.

Sin embargo, la reiterada experiencia histórica de Guatemala confirma que una golondrina no hace verano.